

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto remitido se enmarca dentro del proceso de reforma de la normativa sobre mercado de valores que pretende acabar, en la medida de lo posible, con el excesivo carácter reglamentista del vigente texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, siguiendo el criterio señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen 319/2018, en el que se destacaba cómo una regulación ordenada de los mercado de valores hubiera exigido una ley de nueva planta que contuviera las normas y principios básicos, remitiendo a la vía reglamentaria el desarrollo pormenorizado en tantos reglamentos como fueran necesarios.

De este modo, y con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica, se han elaborado un anteproyecto de ley y tres proyectos de real decreto, teniendo el presente por objeto completar la transposición de la Directiva 2019/2034/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE y completar el desarrollo reglamentario del régimen aplicable a las entidades que prestan servicios de inversión tras los cambios introducidos en la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, recogiendo en un único texto normativo el régimen jurídico aplicable a las entidades que prestan servicios de inversión (empresas de servicios de inversión y sus agentes, entidades de crédito y sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva).

Asimismo, se procede a la incorporación de la Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las empresas de servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19.

Tal y como se señala en el Informe 66/2021, referente al Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, teniendo en cuenta que su finalidad primordial es la de proceder a una deslegalización de gran parte de sus preceptos para incluirlos en los correspondientes reglamentos de desarrollo, por lo que se refiere a los tratamientos de datos de carácter personal debe tenerse presente la doctrina constitucional, recogida, entre otras, en las Sentencias 292/2000 y 76/2019, de acuerdo con la cual los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, y estableciendo las garantías adecuadas.

Por consiguiente, en el nuevo esquema planteado de una ley marco y reglamentos de desarrollo, los aspectos esenciales que afecten a los tratamientos de datos de carácter personal deberán quedar recogidos en la norma legal, sin perjuicio de su ulterior desarrollo, dentro de los límites legales, por los correspondientes reglamentos, conforme a la doctrina constitucional anteriormente señalada.

A este respecto, en relación con el tratamiento de datos personales relativos a las condenas penales y sanciones administrativas para apreciar el cumplimiento del requisito de honorabilidad y a los que se refiere específicamente el artículo 55.2.b) del proyecto, se reitera la observación realizada en el Informe 66/2021 sobre la necesidad de que dicha regulación se incorpore en el texto de la Ley:

En virtud de lo expuesto, esta Agencia considera que debería modificarse el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 163, con el objeto de incluir en el mismo, respecto de la información relativa a la condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas que deben valorarse para la apreciación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad y honorabilidad, la identificación de las conductas y tipos delictivos que deben ser objeto de valoración y el uso de los mismos, de acuerdo con los principios de minimización y limitación de la finalidad, trasladando a dicho artículo el contenido que para su aplicación, se establece actualmente a nivel reglamentario.

Asimismo, el supuesto contemplado en la letra c) del artículo 55.2.b) del proyecto, relativo a “la existencia de investigaciones relevantes, tanto en el ámbito penal como administrativo, basadas en

indicios fundados...” debe incorporarse, igualmente, al artículo 163 del anteproyecto de ley.

Por otro lado, debe hacerse referencia al artículo 143 del proyecto, que desarrolla el deber general de información a los clientes establecido por el artículo 196. **A este respecto, y sin perjuicio de la aplicación directa del RGPD, se sugiere la inclusión de un apartado específico que haga referencia a la necesidad de cumplir con el deber de información previsto en la normativa sobre protección de datos personales.**

En cuanto al resto de la regulación contenida en el proyecto, el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados se encuentra en el citado Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, limitándose el presente proyecto de real decreto a su desarrollo sin que se aprecie, por parte de esta Agencia, extralimitaciones en dicho desarrollo o el establecimiento de nuevos tratamientos de datos personales que requerirían de norma con rango de ley.